



# Boletín Oficial

DE LA  
PROVINCIA DE ZAMORA.

Las leyes y las disposiciones generales del Gobierno son obligatorias para cada capital de provincia desde que se publican oficialmente en ella, y desde cuatro días después para los demás pueblos de la provincia.—*Ley de 3 de Noviembre de 1857*—No podrá insertarse nada en este periódico sin autorización del Sr. Gobernador civil.)

Las disposiciones de las Autoridades, excepto las que sean a instancia de parte no pobre, se insertaran oficialmente, como asimismo cualquier anuncio concerniente al servicio público que demande de las mismas; pero los de interés particular pagarán su inserción, que se hará por orden del Señor Gobernador.

Se publica este periódico oficial los Lunes, Miércoles y Viernes.—Se suscribe en la imprenta de Ildefonso Iglesias, calle de la Rua, número 35, al precio de 12 reales mensuales para fuera franco de porte, y 10 en la ciudad llevado á domicilio.—En dicha imprenta se admiten los anuncios.—La suscripción se hará por trimestres adelantados.

**PARTÉ OFICIAL.****PRESIDENCIA  
DEL CONSEJO DE MINISTROS.**

S. M. la Reina nuestra Señora (que Dios guarde) y demás augusta Real familia, continúan sin novedad en su importante salud.

**GOBIERNO DE LA PROVINCIA.****SECCION DE ORDEN PUBLICO.****NUM. 5.**

Reclamándose á mi autoridad por el Señor Gobernador de la provincia de Logroño la persona de Santiago Adanaz, quinto prófugo por el cupo de aquella capital en el reemplazo de 1860, á quien se supone residiendo en esta provincia,

en su oficio de jornalero del campo, ó en las obras públicas; encargo á los Señores Alcaldes de la misma, destacamentos de la Guardia civil, empleados de vigilancia pública y demás dependientes de este Gobierno, practiquen diligencias en busca del referido Santiago Adanaz, cuyas señas se anotan á continuación, á quien, caso de ser habido, lo remitirán á mi disposición con las seguridades convenientes á los efectos procedentes.

Zamora 5 de Enero de 1863

Romualdo Becerril.

Señor de Santiago Adanaz.

Edad 24 años.

Estatura cinco pies.

Color bueno.

Pelo castaño.

Ojos azules.

Barba poca.

Tiene una señal en uno de los brazos y se le supone provisto de pasaporte militar ó con cédula de vecindad supuesta.

gunda licitacion intentada para el referido artículo de cebada el 24 de Noviembre próximo pasado, se convoca por el presente á una tercer subasta, que, bajo las mismas bases y condiciones anunciadas para la primera en 20 de Setiembre anterior, ha de tener lugar en los estrados de ambas citadas dependencias, á las doce del dia 20 de Enero próximo, con objeto de contratar la adquisicion de dicha especie, pero por solo el número de quintales que se necesitan desde 1.<sup>º</sup> de Enero hasta fin de Setiembre de 1863, los cuales, con la garantía que han de acompañar á las proposiciones, son los siguientes:

PUNTOS DEL CONSUMO.	PROCEDENCIA DE LA CEBADA.	PESO REGULAR DOR DE LA FANEGA.	NUMERO DE QUINTALES.	GARANTIA. RS. CENTS.
Madrid.....	Del pais y la Mancha.	72 libs.	76303 50	
Vicálvaro.....	Idem.	73	18018	
Aranjuez.....	Idem.	69	12012	
Alcalá.....	Idem.	72	20884 50	
Guadalajara.....	Idem.	71	696 15	
			127914 15	314000

El nuevo precio límite que se forme estará de manifiesto en las Secretarías de la Intendencia del distrito y de esta Dirección general.

Madrid 31 de Diciembre de 1862.—De orden de S. E., el Intendente Secretario, José Ruiz y Belluga.

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION MILITAR.****ANUNCIO.**

Hago saber: Que no habiendo producido remate con relación al artículo de cebada, la subasta celebrada simultáneamente ante esta Dirección y la Intendencia de Castilla la Nueva, el 29 de Noviembre último, á fin de contratar la adquisición de las primeras materias del suministro de pan y pienso necesarias en dicho distrito durante el año económico que vencerá en 30 de Setiembre de 1863, así como tampoco lo produjo la se-

(Gaceta del 24 de Diciembre.)

Supremo Tribunal de Justicia.

En la villa y corte de Madrid, á 18 de Diciembre de 1862, en los autos pendientes ante Nos por recurso de casación, seguidos en el Juzgado de primera instancia de Santander y en la Sala tercera de la Real Audiencia de Burgos por Doña Isabel Moncayo, y por su fallecimiento por el curador *ad litem* del menor José Aniceto, con D. José Alvarez Velarde sobre que este le reconozca por su hijo.

Resultando que Doña Isabel Moncayo, huérfana de padre, soltera y de 31 años de edad, entabló demanda en 17 de Agosto de 1858, en la que, exponiendo que por espacio de 11 años había sostenido relaciones amorosas con D. José Alvarez Velarde, y que por resultado de ellas había dado a luz un niño el dia 17 de Abril de 1857, lo cual le constitua en el concepto de estuprador y obligado al reconocimiento de la prole por ser una de las responsabilidades de segundo orden consignadas en el Código penal, pidió se le condenara á que reconociera al niño José Aniceto, como habido en sus relaciones amorosas con la demandante y como estuprador de ella, así como á que le mantuviera con arreglo á sus facultades.

Resultando que D. José Alvarez impugnó la demanda fundando en que, si bien era cierto que había sostenido relaciones con Doña Isabel Moncayo, no lo era que fuese padre del niño José Aniceto, siendo improcedente la acción civil que se había querido deducir de un delito que no había existido con arreglo al Código, puesto que la demandante tenía 31 años.

Resultando que fallecida Doña Isabel Moncayo en 7 de Setiembre de 1858, se continuó el pleito por el curador *ad litem* que se nombró al menor, y que practicada prueba por las partes, dictó sentencia el Juez de primera instancia, por la que absolvio de la demanda á D. José Alvarez Velarde, en cuanto por ella se pedía el cumplimiento de las obligaciones civiles que eran consecuencia de las criminales según el Código penal, reservando su derecho al curador *ad litem* de menor José Aniceto para que usase de que le compitiera en el juicio procedente.

Resultando que confirmada esta sentencia por la que en 16 de Febrero de 1861 pronunció la Sala tercera de la Audiencia de Burgos, en cuanto por ella se absolvía á D. José Alvarez, de la demanda, interpuso el curador del menor recurso de casación, citando como infringidos el art. 366 del Código penal, que en su párrafo tercero da derecho para

interponer la demanda de estupro, aun cuando la mujer pase de 23 años; las leyes del tit. 19 de la Partida 7.; las del tit. 13 de la Partida 6., el principio de derecho, segun el que el que causa un daño está obligado á resarcirle; el art. 21 del Código penal, segun el qual en los delitos que solo puede perseguir el agraviado, puede extinguir con su perdón la acción penal y reservarse la civil; la doctrina y práctica de los Tribunales, segun la que, probado el delito, debe reconocer el estuprador la prole, supliéndolo el Tribunal con su sentencia; y por último, la ley 5.º del tit. 19 de la Partida 4..

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Joaquín de Palma y Vinuesa.

Considerando que para fundar este recurso no han debido invocarse disposiciones del Código penal, ni las doctrinas, que emanando de ellas, solo pudieran tener aplicación en un procedimiento criminal.

Y considerando que las infracciones que también se alegan de las leyes del tit. 19 de la Partida 7., de las que comprende el 13 de la 6.; de la 5., tit. 19 de la Partida 4., y del principio de derecho que el que causa un daño está obligado á resarcirlo, prescindiendo de la inconveniencia de citar títulos enteros de un Código, están invitadas en suponer y dar como ciertos los hechos decisivos de la cuestión contra la apreciación de la Sala sentenciadora, y el criterio formado en uso de sus atribuciones y por el resultado de las pruebas adducidas en el pleito.

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el curador del menor José Aniceto, á quien condenamos en las costas, devolviéndose los autos á la Real Audiencia de Burgos con la certificación correspondiente.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta é insertará en la Colección legislativa, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Ramon Lopez Vazquez.—Sebastian Gonzalez Nandin.—Gabriel Ceruelo de Velasco.—Joaquin de Palma y Vinuesa.—Pablo Jimenez de Palacio.—Laureano Rojo de Norzagaray.—Tomás Huet.

Publicación.—Leída y publicada fué la precedente sentencia por el Exmo. e Ilustrísimo Sr. D. Ramon Lopez Vazquez, Presidente de la Sala primera del Supremo Tribunal de Justicia, celebrando audiencia pública la misma Sala en el dia de hoy, de que yo el Escríbano de Cámara certifico.

Madrid 19 de Diciembre de 1862.—Juan de Dios Rubio.

En la villa y corte de Madrid, á 19 de Diciembre de 1862, en los autos pendientes ante Nos por recurso de casación, seguidos en el Juzgado de primera instancia de Lugo y en la Sala primera de la Real Audiencia de la Coruña por Doña Rafaela Fernandez Cid con Doña Carmen Miranda, sobre adjudicación del tercio de los bienes de D. Antonio Maria Miranda.

Resultando que con motivo del matrimonio de D. Francisco Miranda y Doña Rafaela Fernandez Cid, los padres del primero, D. Antonio Maria Miranda y Doña Antonia Diaz Freire, le mejoraron por escritura de 13 de Octubre de 1842 en el tercio de todos los bienes que quedasen á su fallecimiento, designando las fincas de donde se había de sacar; mejora que fue ratificada y aceptada respectivamente por los interesados en la escritura de capitulaciones matrimoniales de 19 de Octubre del mismo, obligándose los esposos á casarse y cumplirla; y que contraído el matrimonio, D. Francisco Miranda falleció el 2 de Setiembre de 1858, y su hija única Doña Maria de la Paz en 11 del mismo mes.

Resultando que D. Antonio Maria Miranda otorgó testamento en 29 de Mayo de 1859, en el que declaró que solo tenía dos hijos, D. Juan y Doña Carmen.

Y teniendo presente que la mejora de tercio y quinto que había otorgado á su hijo D. Francisco al casarse con Doña Rafaela Fernandez Cid había caducado por no haberse deferido en él ni en sus descendientes, ni podido trasmisitirse á extraños, revocándola á mayor abundamiento, si preciso fuese, hizo igual mejora de tercio y quinto á favor de su hija Doña Carmen.

Resultando que fallecido bajo este testamento D. Antonio Maria Miranda y promovido el juicio voluntario de testamentaria, acudió á él Doña Rafaela Fernandez Cid en 11 de Noviembre de 1859 entablando demanda para que se la adjudicase el tercio de todos los bienes del D. Antonio, fundada en que la escritura de 13 de Octubre de 1842 era un verdadero contrato *inter vivos* por causa onerosa é irrevocable, y que el derecho que por él había adquirido D. Francisco Miranda lo había trasmisido á su hija Doña Maria de la Paz; y esta á su vez á la demandante, como consecuencia de las leyes de sucesión forzosa.

Resultando que Doña Carmen Miranda impugnó la demanda, porque no habiéndose deferido la herencia de su padre hasta su fallecimiento no podían optar á ella si no personas capaces de heredarle, capacidad que no tenían más que sus hijos y descendientes, y porque el tercio era herencia necesaria de los que viviesen al fallecimiento del padre.

Resultando que absueltá de la demanda Doña Carmen Miranda por la sentencia que en 9 de Marzo de 1861 pronunció la Sala primera de la Audiencia de la Coruña confirmando la del Juez inferior, interpuso la demandante recurso de casación, citando como infringidas la sentencia de este Supremo Tribunal de 30 de Junio de 1858; las leyes 17, 21 y 22 de Toro; la Real Pragmática de 7 de Marzo de 1805; las leyes 13, tit. 9.º, y 8.º y 10, tit. 33 de la Partida 7.; la 11, tit. 14, Partida 3.; la 3.º, tit. 6.º, y la 12 y la 14, tit. 11 de la Partida 5.; la ley 26 de Toro; la 6.º, tit. 2.º, libro 5.º del Fuero Juzgo, original latino; la 1.º, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación; y por último, la doctrina de jurisprudencia sentada por este Supremo Tribunal en sentencia de 27 de Enero de 1858, según la que, considerado el tercio como un derecho eventual, puede cederse, y el cesionario adquirirlo y transmitirlo con la misma eventualidad á sus herederos.

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Laureano Rojo de Norzagaray.

Considerando que la cuestión de este pleito está reducida á saber, si la demandante como heredera de su hija ha sucedido en el derecho que ésta á su vez adquirió de su padre, mejorado en el tercio de todos sus bienes por el suyo respectivo en escrituras de 13 y 19 de Octubre de 1842, otorgadas por causa onerosa.

Considerando que según la ley 17 de Toro, ó sea la primera, título sexto, libro diez de la Novísima Recopilación, la mejora del tercio hecha por el padre en favor de alguno de sus hijos ó descendientes en un contrato entre vivos, es irrevocable cuando aquél ha entregado los bienes en que consistía la mejora, ó la escritura de la misma ante Escríbano, ó dicho contrato se hubiere hecho por causa onerosa con otro tercero, así como por vía de casamiento, ó por otra causa semejante.

Considerando que las mencionadas escrituras contienen un contrato bilateral de reciprocas obligaciones y derechos entre los otorgantes, y que habiéndose verificado el matrimonio, fundamento de la mejora, adquirió un derecho el hijo y contrajo una obligación consiguiente el padre de hacer efectivo el tercio de todos los bienes que dejará á su fallecimiento, debiendo cumplir esta obligación los herederos como trascendental á ellos.

Considerando que adquirido el derecho en virtud del contrato oneroso, pudo trasmisitirle el hijo mejorado, ya en vida, ya en muerte, al que le hubiere de suceder, por testamento ó abierto testamento, y que en este concepto heredó su hija aquel derecho como un bien que, estando en

la herencia del padre, aumentaba su patrimonio.

Considerando que fallecida la hija antes que la madre, hoy demandante, se trasmitió a ella dicho derecho, en el propio concepto de heredera forzosa, el cual la constituye acreedora como pudiera serle otro cualquier extraño, a quien por algún título legítimo de los conocidos en derecho se hubiera trasferido.

Considerando que por el testamento de 29 de Mayo de 1839 no pudo revocarse dicha mejora por la circunstancia esencial de que un acto unilateral, como es un testamento, no es bastante eficaz para destruir la fuerza de un contrato bilateral, porque entonces estaría en arbitrio de uno de los contrayentes separarse y prescindir de las obligaciones contraídas por su parte.

Y considerando que la Sala sentenciadora, separándose en su fallo de estos principios, ha infringido la ley 17 de Toro, así como las demás que con ella tienen conexión, citadas por el recurrente.

Fallamos que debemos declarar y declararlos haber lugar al recurso de casación interpuesto por Doña Rafaela Fernández Cid, y en su consecuencia casar y anular, como casamos y anulamos, la sentencia pronunciada por la Sala primera de la Real Audiencia de la Coruña, en 9 de Marzo de 1861, devolviéndose el depósito constituido para la remesa de los autos.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta e insertara en la Colección legislativa, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Ramon Lopez Vazquez—Sebastián González Nandia.—Gabriel Ceruelo de Velasco—Joaquín de Palma y Vinuesa.—Pablo Jiménez de Palacio.—Laureano Rojo de Norzagaray.—Tomas Huel.

Publicación.—Leída y publicada fué la precedente sentencia por el Ilustrísimo Señor D. Laureano Rojo de Norzagaray, Ministro de la Sala primera del Supremo Tribunal de Justicia, celebrando audiencia pública la misma Sala en el dia de hoy, de que yo el Escribano de Cámara certifico.

Madrid 20 de Diciembre de 1862.—

Juan de Dios Rubio.

(Gaceta del 26 de Diciembre.)

## CONSEJO DE ESTADO.

REAL DECRETO.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española Reina de las Españas. Al Gobernador y Consejo provincial de Santander y

á cualesquiera otras Autoridades y personas a quienes toca su observancia y cumplimiento, sabed: que he venido en decretar lo siguiente:

«En el pleito que en el Consejo de Estado pende en grado de apelación entre partes, de la una el pueblo de Pedredo del Ayuntamiento de Riovaldeiguña, provincia de Santander, y en su nombre el Licenciado D. José María Gutiérrez de Arce, apelante, y de la otra el pueblo de las Fraguas, del Ayuntamiento de Arenas representado por el Doctor D. Fernando de Madrazo, apelado; sobre mancomunidad de pastos.

Visto: Vistos los antecedentes de este pleito, y entre ellos la concordia otorgada en 19 de Junio de 1833 entre los Concejos de Riovaldeiguña y las Fraguas en razón de las diferencias que habían tenido, y estaban pendientes, sobre el uso y aprovechamiento de los pastos y términos contiguos, ratificando las escrituras y contratos que había, sin perjuicio ni alteración de los mismos, cuyas cláusulas contenían lo siguiente:

«En cuanto al aprovechamiento y pasto de la sierra de Llenderancos se entiende que las Fraguas no pueda llevar la cabana de vacas á dicha sierra desde 1.º de Mayo hasta Navidad, y desde este día hasta el 1.º de Mayo pueda llevar dicho ganado, vaqueando y habiéndolo hasta la regata de Llenderancos, y de allí adelante se vaya por donde quisiere, y el pastor pueda ir tras de él en su guarda y seguidamente para recogerlo y guardarlo,» expresándose en ellas además esta otra: «En cuanto al uso y aprovechamiento de dicha sierra, y pastos y roza dura de ella entre el Concejo de las Fraguas, lugar de Pedredo y Concejo de Riovaldeiguña, se conserven en la comunidad que han tenido y tienen de uso y costumbre guardando cada uno su salida.»

Visto el certificado del juicio de conciliación que en 28 de Febrero de 1839 celebraron ante el Ayuntamiento de Riovaldeiguña los Alcaldes de las Fraguas y Pedredo por una prenda de ganado vacuno que este hizo á aquél, manifestando haberse excedido de las contratas celebradas entre ambas comunidades, y en cuyo acto se resolvió que el de las Fraguas debió haber dado aviso anticipado al de Pedredo para meter parte de la cabana en la sierra ántes de la época contralada, pero en atención á la necesidad que lo motivó, y á la mancomunidad de pastos que tenían ambos Concejos, fuese condenado el de las Fraguas á que pagase al de Pedredo 18 rs. en vez de los 36 que este le impuso, expresándose que no se hallaba facultado para muliar á su capricho, sino arreglándose en lo

sucesivo á las ordenanzas municipales, todo lo que se hizo saber á las partes, con cuya providencia se conformaron:

Vistos otros documentos referentes á prendas verificadas por Pedredo al pueblo y vecinos de las Fraguas por haber echado á pastar sus ganados vacunos y lanares en la sierra de Llenderancos:

Visto el expediente gubernativo, del que resulta:

Que en 29 de Abril de 1859 el Alcalde pedáneo y Diputación del pueblo de las Fraguas remitieron dos oficios al Alcalde de Riovaldeiguña pidiendo que ordenase dar cultura al hato de ovejas que el Teniente Alcalde les había prendado en la sierra de Llenderancos, termino jurisdiccional de este Ayuntamiento, pero de mancomunidad de pastos con aquel pueblo, y manifestando que percian las crías como separadas de sus madres, que esto causaba alarma al vecindario, y alteraba los usos y costumbres que de muy antiguo venían rigiendo.

Que el Alcalde de Riovaldeiguña se desentendió de estas comunicaciones, expresando que no había tomado parte en el asunto.

Que el Gobernador en 3 de Mayo, á fin de evitar los daños que pudieran originarse, dispuso que se devolvieran las ovejas á sus dueños, sin perjuicio de resolver lo que procediera acerca de los fundamentos de dicha prenda.

Que en 7 del citado mes D. Laureano Cieza Collantes, en concepto de encargado por el vecindario de Pedredo, dirigiéndose á la misma Autoridad, expuso que según concordia, los ganaderos de las Fraguas podían llevar á Llenderancos tan solo las cabanas de vacas, si bien estaba circunscrito el permiso á cierta época; que el ganado lanar le habían apacentado siempre en otra sierra; que contra esta costumbre acababan de apacentarle en Llenderancos, y por eso le perdieron, y pidió se obligase á los dueños de las cabezas prendadas que pagasen lo determinado por concordia ó afianzaron.

Que apreciado este segundo extremo, se decretó á la vez que informara el Alcalde de Riovaldeiguña, quien con el Ayuntamiento se refirió á lo expuesto por Cieza Collantes.

Que pedido igualmente informe al Ayuntamiento de Arenas, lo evacuó en 7 de Julio manifestando que en la concordia había la cláusula de que el aprovechamiento en la sierra de Llenderancos se conservase entre las Fraguas y Pedredo en conformidad al uso y costumbre que habían tenido, guardando cada uno su salida, por lo que el ganado lanar de las Fraguas había ido á dicha sierra.

Que en 31 de Diciembre la mencio-

nada Autoridad dispuso que el Alcalde de Arenas hiciese una información ante el Alcalde de Molledo para probar la posesión, resultando de la práctica la y por declaración de seis testigos que estos habían visto á los ganados de las Fraguas, tanto lanar como vacuno, pastar en la sierra de Llenderancos, unidos á los de Pedredo.

Que, por último, el Gobernador en 27 de Febrero de 1860, conforme á la regla 2.º de la Real Orden de 17 de Mayo de 1838 y la de 8 de Enero de 1841, acordó se hiciese saber al Alcalde de Riovaldeiguña que por el pedáneo de Pedredo, se respetara en lo sucesivo la posesión en que estaba el pueblo de las Fraguas de aprovechar los pastos con toda clase de ganados en la sierra de Llenderancos, mancomunadamente con dicho pueblo en las épocas marcadas, en su concordia, reservandoles su derecho respecto á las cuestiones de propiedad, que podrían versar ante el Tribunal competente, sin alterar entre tanto la posesión de este aprovechamiento, y quedando en su virtud sin efecto la prendada verificada en Abril último y alzada la fianza preventiva al de las Fraguas, si la hubiese prestado.

Vista la demanda que en 7 de Mayo del mismo año presentó el Alcalde de Pedredo ante el Consejo provincial pidiendo declarase que el de las Fraguascía tenía de derecho para llevar al pasto á la sierra de Llenderancos en tiempo alguno su ganado lanar, y en su consecuencia se abstuviese de hacerlo, y se le condonase al pago de las multas y resarcimientos de perjuicios.

Visto el escrito de contestación del pueblo de las Fraguas solicitando la confirmación de la providencia gubernativa, imponiendo al demandante la pena pecuniaria establecida en la concordia con el destino que la misma determinaba.

Vistos los escritos de réplica y duplique en que cada parte reprodujo sus anteriores pretensiones.

Vistas las pruebas que una y otra han ejecutado.

Vista la sentencia dictada por el referido Consejo provincial en 26 de Noviembre siguiente, por la que se declaró que los vecinos de las Fraguas tenían tenían derecho de mancomunidad de pastos en la sierra de Llenderancos con el Concejo de Pedredo que les concedía la concordia habida entre ambos pueblos, de cuyos pastos podría disfrutar con toda clase de ganados, sin exclusión del lanar, guardando siempre las salidas y demás requisitos que prescribia la citada concordia.

Visto el escrito de apelación interpuesto por el pueblo de Pedredo, y el

de mejora que en su representación formalizó el Licenciado D. José María Gutiérrez de Arce ante el Consejo de Estado, con la solicitud de que se revoque la mencionada sentencia al tenor de lo pretendido en primera instancia con imposición de costas á los demandados.

Visto el que presentó el pueblo de las Fraguas, y en su nombre el Doctor D. Fernando de Madrazo, pidiendo la confirmación de la citada sentencia absolviendo á las Fraguas de la demanda, y declarando que sus vecinos tienen con los del Pedredo el derecho de mancomunidad de pastos que le concede la posesión inmemorial, pudiendo disfrutarlos con toda clase de ganados, guardando las salidas según la concordia.

Vista la Real orden de 17 de Mayo de 1838, en que se dispone se respete la posesión de pastos y aprovechamientos comunes, segun haya existido de antiguo, sin alterarla hasta que judicialmente se decida la cuestión de propiedad, si alguno de los interesados lo intentase en uso del derecho que la misma Real orden les reserva.

Considerando que en la concordia de 19 de Junio de 1655 se reconoció y ratificó el derecho del Concejo de las Fraguas al uso y aprovechamiento de la sierra de Llenderancos, sus pastos y rozaduras con el lugar de Pedredo y Concejo de Riovaldeguña, conviniendo en que se conservasen en la comunidad que habían tenido y tenían de uso y costumbre.

Considerando que la limitación de tiempo en la misma concordia establecida para el aprovechamiento de los pasos de dicha sierra se contrajo á la cabaña de vacas, sin que respecto del ganado lanar, que es del que en este pleito se trata, se hubiese recordado ni establecido ninguna prohibición.

Considerando que esta prueba documental y preconstituida del derecho de las Fraguas al disfrute de la sierra de Llenderancos se halla corroborada por la posesión que ha acreditado en este pleito con una prueba testifical directa y completa; circunstancias de que carece la dada por el lugar de Pedredo, que solo alegó hechos indirectos, los cuales, aun contestados suficientemente, no hubieran podido enervar valor de aquella doble justificación.

Considerando que limitado este pleito á la cuestión de posesión, única de la competencia de los Tribunales contencioso-administrativos, debe respetarse y mantenerse la que el pueblo demandado justificó, mientras en juicio de propiedad no se acrediten otros derechos.

Conformándome con lo consultado por la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado en sesión á que asistieron Don Domingo Ruiz de la Vega, Presidente; D. Joaquín José Casaus, D. Francisco de Luxán, D. José Antonio de Oláñeta, Don Antonio Escudero, el Conde de Torremarin, D. Juan Chinchilla, D. José del Villar y Salcedo y D. Antero de Echarri,

Vengo en absolver al Concejo de las Fraguas de la demanda del pueblo de Pedredo, sin perjuicio de que use de su derecho, si le conviniere, en el juicio correspondiente, confirmando, en lo que

con esta sea conforme, la sentencia del Consejo provincial de Santander.

Dado en Palacio á 24 de Noviembre de 1862.—Está rubricado de la Real mano.—El Presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O'Donnell.

Publicación.—Leído y publicado el anterior Real decreto por mí el Secretario general del Consejo de Estado, hallándose celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso, acordó que se tenga como resolución final en la instancia y autos á que se refiere; que se una á los mismos; se notifique en forma á las partes, y se inserte en la Gaceta, de que certifíco.

Madrid 6 de Diciembre de 1862.—Juan Sunyé.

### Universidad literaria de Salamanca.

#### ANUNCIO.

En cumplimiento de lo dispuesto en la regla tercera de la Real orden de 10 de Agosto de 1858, se publican á continuación las Escuelas vacantes en las siguientes provincias:

#### AVILA.

##### Completas de niños de provision ordinaria.

Las de Velayos y Gavilanes, dotadas con 2 500 rs.

##### Incompletas de niños de provision ordinaria.

Huiguera de las Dueñas con 2 000 reales; Garganta del Villar con 1 500; Pozanco, Rivilla de Barajas y Vita con 1 000, y Vicolozano con 500.

##### Escuelas de niñas de oposición que se proveerán por concurso.

La de Fontiveros, dotada con 2.200 reales.

##### De provision ordinaria.

Aldeavieja, Cardeñosa, Muñana, Río-frio, Velayos, Carrera, (Las) Peguerinos, San Juan de la Nava, Becedillas, Cabezas del Villar, Horcajo de la Ribera, Muñotello, Navacepeda de Tormes, San Martín de la Vega, Villatoro y Zapardiel de la Ribera con 1.666 rs. cada una.

### PROVINCIA DE SALAMANCA.

##### Elementales completas de niñas.

La Cabeza, Cantagallos, Cristóbal, Gallegos de Solmiron, Navacarras, Navamorales, Peromingo, Puente del Congosto, Sanchotello, Valdelacasa, Casas del Conde, San Pedro de Rozados, Herguijuela de la Sierra, Sotoserrano y Navaredonda de la Binconada con 1.666 rs. cada una.

##### Incompletas de niñas.

Palomares de Béjar, y Herguijuela de la Herpe, con 1.600 reales; Peña (la), con 1.800; San Pelayo, 1.400; Torres-

menudas y Bouza, con 1.200 reales; Diosleguarde, Berganciano, Pinedas y Gema, con 1.000 reales.

#### Imcompletas de niñas.

Zamayon y Rinconada, con 1.100 reales cada una. Todas tienen además los emolumentos de ley.

Los aspirantes á las anteriores Escuelas presentarán las solicitudes escritas de su puño y letra, en la Secretaría de la respectiva Junta de Instrucción pública, por término de un mes, á contar desde la publicación de este anuncio.

A las solicitudes acompañarán la certificación de buena conducta, firmada por el Señor Cura párroco y Alcalde del domicilio del interesado, relación de méritos y servicios y el título profesional ó copia del mismo, para las Escuelas completas; bastando para las incompletas certificado de aptitud ó haber probado algún curso de Escuela normal.

Salamanca 3 de Enero de 1863.—El Rector, Tomás Belestá.

### Registro de la Propiedad de Villalpando.

D. Carlos Fernández, Registrador de la propiedad de Villalpando,

Hago saber: Que este Registro de mi cargo estará abierto al público seis horas todos los días no feriados, las cuales serán de ocho de la mañana á dos de la tarde, señaladas con aprobación del Señor Juez de este partido.

Villalpando 3 de Enero de 1863.—Carlos Fernández.

### PROVIDENCIAS JUDICIALES.

Don Ezequiel Valdés, Juez de primera instancia de esta ciudad de Zamora y su partido.

Por el presente hago saber á todos los acreedores al concurso voluntario de bienes de D. Francisco Lorenzo, de esta vecindad, que celebrada en 29 de Diciembre próximo pasado la junta general acordada por auto de 29 de Noviembre anterior, en el expediente de su razon, para el nombramiento de Síndicos, resultaron elegidos por mayoría de votos, conforme á la ley, de los acreedores concurrentes, los que lo son por derecho propio. Don Mariano Gallego, de esta vecindad, y Don José María Díaz Mendivil, vecino de Madrid, con residencia actualmente en esta ciudad, á quienes se ha puesto en posesión de su cargo; y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 547 de la ley de Enjuiciamiento civil, se ha acordado por auto de 2 del corriente darles á conocer y publicar su nombramiento por medio del presente edicto, que se insertará en la Gaceta de Madrid y Boletín oficial de la provincia, con prevención de que se

haga entrega á los mismos Síndicos de cuanto corresponda al concursado por todas las personas que tuvieren en su poder fondos ó bienes pertenecientes al último.

Dado en Zamora á cinco de Enero de mil ochocientos sesenta y tres.—Ezequiel Valdés.—Por mandado de S. S., Lorenzo Sardón.

### ANUNCIOS OFICIALES.

Anunciando la vacante de una plaza de Guarda mayor de montes en esta provincia.

D. Luis Díaz Sala, Jefe de la clase de segundos de Secciones de Fomento con destino á la de esta provincia.

Hago saber: Que hallándose vacante una plaza de Guarda mayor de montes de esta provincia, por separación del que la desempeñaba, y debiendo proveerse por el Señor Gobernador en la forma que prescribe el artículo 2.<sup>o</sup> del Real decreto de 23 de Noviembre de 1859, los que deseen obtenerla pueden presentar sus solicitudes debidamente documentadas en esta oficina, dentro del término de quince días, contados desde esta fecha.

Zamora 3 de Enero de 1863.—Luis Díaz Sala.

### ANUNCIOS PARTICULARES.

A voluntad de su dueño se vende una casa, conocida por la del Galleguito, sita en esta ciudad de Zamora, calle de San Torcuato, número 14.

Las personas que quieran interesarse en la compra, pueden tratar con la dueña, que vive en la misma casa, cuarto segundo.

En la imprenta de este periódico oficial, se vende tinta negra y de colores para los sellos de los Ayuntamientos.

Cartillas de los Jueces de paz, por D. Remigio Salomon, Juez de primera instancia de Santander, al infimo precio de 5 reales cada una.